

Santiago, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.

A los escritos folios 200272-2022 y 200273-2022: a todo, téngase presente.

Vistos:

Se reproduce la sentencia apelada, previa eliminación de sus fundamentos 6° a 9°.

Y se tiene en su lugar, además, presente:

1°.- Que la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Chillán, en causa Rit 679-2022, dictada con fecha siete de noviembre último, que rechazó la solicitud de la defensa de dejar sin efecto el traslado de la imputada Melissa Aravena Navarrete desde el C.C.P. de Chillán al ubicado en Concepción, se fundó en el mayor compromiso delictual en que fue clasificada, tras haber sido sorprendida portando un teléfono celular y agredir al personal de gendarmería.

2°.- Que, no existe controversia entre las partes en cuanto a que la amparada se encuentra en prisión preventiva desde el mes de marzo del año en curso, por haber sido formalizada por el delito de microtráfico, tiene arraigo familiar en la comuna de Chillán -su madre y un hijo pequeño- y se recibe atención médica en forma regular en el Hospital Clínico de la misma comuna, por padecer de cáncer mamario, para lo cual su defensa ha obtenido las autorizaciones pertinentes que le permitan asistir a los referidos controles médicos,

3° Que, por otra parte, la facultad de la autoridad administrativa de Gendarmería de Chile para disponer el traslado de los condenados, contemplada en el artículo 6 N° 12 de su Ley Orgánica y en el artículo 28 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, supone una ponderación de las circunstancias de hecho que conducen al ejercicio de esa prerrogativa, evaluación que pertenece a la



motivación del acto administrativo, cuya ausencia contravendrá el principio de razonabilidad y devendrá por ello en ilegal. Tales atribuciones conforman una herramienta de la autoridad que se caracteriza por otorgar un margen de libertad para decidir de una manera u otra, pero no obstante ello, jamás puede invocarse para encubrir una actuación que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales de alguna persona, pues por aplicación del artículo 6° de la Constitución Política de la República, la autoridad está obligada a respetar todas las normas del texto constitucional, entre las que se incluye el derecho a la libertad personal, a la seguridad individual y al debido proceso. La Constitución Política, en su artículo 19 N° 26, dispone que sólo una habilitación expresa de la ley puede autorizar una afectación en el ejercicio de derechos fundamentales y en tal caso, los hechos y fundamentos de derecho del acto de la autoridad que los limite, restrinja, prive, perturbe o amenace "deberán siempre expresarse", de acuerdo a lo que dispone el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos.

4°.- Que, asimismo, Gendarmería debe orientar su labor a la resocialización de los internos que tiene a su cuidado, lo que importa, en la medida de lo posible, llevar a cabo la privación de libertad respetando el arraigo de la imputada a su lugar de residencia y el de sus familiares que pudieran contribuir a dicho fin, además de aspectos médicos relevantes donde recibe atención médica de la grave patología que la afecta, aspecto que en este caso debió ser sopesado, sin que los motivos expresados en el informe por el Departamento de Control Penitenciario aparezcan de la entidad suficiente para justificar el dictamen emitido, de manera que parecen injustificados y carente de razonabilidad para justificar el consiguiente desarraigo que



conllevar el desechar la solicitud de traslado.

5°.- Que, en este contexto, aparece que la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Chillán aparece como carente de motivos suficientes que la justifiquen, alejada de lo previsto en el artículo 53 inciso segundo del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios que establece que *“En resguardo del derecho a visitas, los condenados deberán permanecer reclusos preferentemente cerca de su lugar habitual de residencia”*, frustrando toda posibilidad de resocialización y apoyo familiar, a lo que se suma que ello afecta también derechos relacionados al debido proceso, como lo es el derecho a defensa en su modalidad de mantener la debida comunicación con la persona que la ejerza, considerados en el artículo 44 de dicho Reglamento al disponer que las comunicaciones entre el privado de libertad y su letrado no pueden suspenderse salvo que exista causa legal para ello.

6°.- Que, finalmente, Gendarmería no dio cumplimiento a lo que dispone el Art. 25 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, en cuanto dispone que *“El régimen de los detenidos, sujetos a prisión preventiva y penados se sujetará a lo establecido en la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, la ley procesal pertinente, la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile y otras leyes y reglamentos relacionados con materias penitenciarias, y las normas del presente reglamento.”*

En la especie, la medida impugnada evidentemente no se ajusta no solo a las disposiciones constitucionales, sino que además se aparta de tratados internacionales sobre derechos humanos. En particular, atenta contra la vinculación de la amparada a su núcleo familiar y de la relación de aquellos con sus cercanos, trasgrediendo con ello el inciso segundo del artículo 1° de la Carta Fundamental, en



cuanto se reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, su protección y fortalecimiento; y el artículo 9 de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, en tanto dispone que los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres, y respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo en ambos casos si ello es contrario al interés superior del niño. Tales derechos pueden verse conculcados en la especie, toda vez que de una parte no se ha justificado que el traslado dispuesto sea necesario para garantizar la vida e integridad física o psíquica de los amparados, de otros internos, o afecte de manera justificada el orden y seguridad del recinto –como exige el artículo 28 del reglamentos antes citado–; y de otra, porque las actuales restricciones derivadas de la sanitaria dificultan notablemente el traslado de la familia que hayan formado los recurrentes a un recinto penitenciario localizado a miles de kilómetros de su domicilio, en otra región del país.

7° Que, por estas consideraciones, se prestará acogida a la acción de amparo deducida por la defensa.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **se revoca** la sentencia apelada de catorce de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán, en el Ingreso Corte N°281-2022, que rechazó el amparo constitucional deducido en favor de la imputada Melissa Aravena Navarrete, disponiendo en su lugar que **el mismo queda acogido**, por lo que se deja sin efecto su traslado al recinto penitenciario de Concepción, dispuesto por Gendarmería de Chile y autorizado por el Juzgado de Garantía de Chillán, debiendo la amparada permanecer en el C.C.P. de Chillán,



en tanto no cambien las circunstancias que motivaron el presente recurso.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 147.639-2022



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Leopoldo Andrés Llanos S., Diego Gonzalo Simpertigue L., Ministro Suplente Juan Manuel Muñoz P. y los Abogados (as) Integrantes Ricardo Alfredo Abuaud D., Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

